

El alcalde Yahir Acuña, sin visa y contra las cuerdas

Los casos del alcalde Acuña y del exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa, son distintos a los que tienen encargados a los congresistas y excongresistas. Acuña -incredulado duramente por el Tigre Abelardo hace poco en Sincelejo- está siendo investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales, que operan en la Región Caribe.

Una de dichas investigaciones la realiza la Corte Suprema de Justicia, donde cursa un expediente por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. La alta corte deberá establecer si Acuña tuvo participación o no en la promoción de esas organizaciones criminales. El nombre de Acuña también se ha visto involucrado en casos de corrupción. De

hecho, el presidente De la Espriella lo increpó con severidad recientemente durante la celebración de un consejo de seguridad en Sincelejo: “Que no quede ninguna duda: no voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo. (...) Yo no sé, alcalde (Acuña), si usted cree que conmigo las cosas son iguales... pues está muy equivocado.

Conmigo las cosas son diferentes. Así que vamos a ver qué hacemos por Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”. La cancelación de su visa por parte de Estados Unidos quiere decir que ese país maneja la misma información del gobierno nacional en lo que tiene que ver con las actuaciones cuestionadas de Acuña.



POR ÓSCAR MONTES
X@leydelmontes

Análisis

LA LEY DEL 'MONTES'

Como nunca antes, Estados Unidos está utilizando todas las herramientas que tiene en sus manos para ayudar a combatir la corrupción política en Colombia. La administración de Donald Trump encontró en Abelardo De la Espriella el mejor aliado para cortarle las alas a uno de los más graves problemas que tiene el país desde hace décadas: la galopante corrupción, que hace que se pierdan cada año unos 70 billones de pesos. Se trata de una verdadera monstruosidad, que se traduce -obviamente- en menos vías, escuelas y hospitales para los colombianos. Menos bienestar para los colombianos y más plata para los bolsillos de la corrupción. Esa es la macabra ecuación que nos rige desde hace décadas.

Para poder erradicar la corrup-

ción -no reducirla a sus “justas” proporciones, como diría el ex presidente Julio César Turbay Ayala- se requiere del compromiso de todo el Estado colombiano y del respaldo de sus mejores aliados estratégicos, como es el caso de Estados Unidos. Hoy por hoy, la corrupción es una verdadera transnacional del crimen organizado y, como tal, hay que enfrentarla. Buena parte de la plata que los funcionarios se roban en Colombia termina en paraísos fiscales y Estados Unidos.

El apretón más reciente del “tío Donald” golpeó con dureza a alcaldes, excongresistas y exfuncionarios del gobierno de Petro, involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión

del Riesgo de Desastres (UNGRD). A todos ellos -21 personas hasta el momento- Estados Unidos les revocó la visa americana, así como a amigos, familiares y socios. La lista es larga y creciente: Ricardo Roa, ex presidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, senador electo por el Partido Conservador; Karen Astrid Manrique, representante a la Cámara electa; Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar Castilla, ex senadores; José Ignacio Mesa, ex alcalde de Envigado.

Ellos se sumaron a otro grupo numeroso, al que también dejaron sin visa, entre los que se destacan el empresario del Atlántico, Euclides Torres, contratista y financiador de la campaña de Petro en el

2022; la senadora de La Guajira, Martha Peralta, mencionada en varias ocasiones en el escándalo de la UNGRD; y el propio presidente Petro, quien -además- está incluido en la lista OFAC, junto con su exesposa Verónica Alcocer y su exministro del Interior, Armando Benedetti, entre otros.

Estar sin visa y en la lista OFAC es -sin duda- habitar el peor de los mundos, porque ello significa -ni más ni menos- la muerte financiera y el ostracismo social por fuera del país. En otras palabras: significa tener miles de millones enterrados y sin poder mover un solo peso de todos los que fueron adquiridos de forma fraudulenta.

A ello suma la actuación del presidente Abelardo De la Es-

priella, quien decidió encarar y confrontar -cara a cara- a todos aquellos funcionarios sobre los cuales las autoridades y el gobierno nacional tienen información precisa sobre presuntos actos de corrupción, como ocurrió con el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña; y la gobernadora de San Andrés, Girley Natascha Ordóñez; y la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang, a quienes increpó por sus actuaciones de frente y con vehemencia.

¿Llegó la hora -¡por fin!- de propinarle el golpe de gracia a los “corruptos de cuello blanco” y a quienes -desde los cargos oficiales- desangran al país, como está sucediendo con los exfuncionarios de Gustavo Petro? Veamos:

Los graves enredos de Ricardo Roa, ex gerente de la campaña de Petro 2022

Ricardo Roa -ex presidente de Ecopetrol- es una de las personas más cercanas a Gustavo Petro. Se trata de una amistad de muchos años. Roa es persona de su absoluta confianza. Que Roa -investigado por la fiscalía por enriquecimiento ilícito -entre otros delitos- se haya quedado sin visa es también un golpe para Petro. ¿La razón? Las investigaciones en su contra tienen que ver con hechos ocurridos durante su desempeño como gerente de la campaña “Petro Presidente 2022-2026”. De acuerdo con la Fiscalía, en dicha campaña se volaron los topes electorales establecidos por más de 2.000 millones

de pesos. Pero otra investigación muy grave en contra de Roa tiene que ver con la compra de un apartamento en el exclusivo barrio Chicó de Bogotá, que habría sido adquirido por el ex presidente de Ecopetrol por 1.800 millones de pesos. El vendedor del mismo fue el expolicía Juan Guillermo Mancera. Según la Fiscalía, el apartamento fue comprado a un bajo precio por Roa, a cambio de entregar contratos de Ecopetrol para favorecer a Mancera. Ambos episodios -campaña presidencial y apartamento- tienen contra las cuerdas a Roa, ahora sin visa y en la mira de Estados Unidos.

Lucha de frente contra la corrupción y sin ningún cálculo político

Que Estados Unidos brinde un espaldarazo al gobierno del Tigre Abelardo en su lucha contra las organizaciones criminales y la corrupción política significa contar con el mejor aliado posible para librar esta batalla. Si algo les preocupa a quienes se han enriquecido desde el Estado es no poder disfrutar de lo que se robaron. Lo único que les duele realmente es el bolsillo. Punto. En esta guerra no se puede ceder un centímetro. Sin visa y en la lista OFAC, los “cacos” del Estado están maniatados y sin capacidad de maniobra. Por eso era tan importante que Estados Unidos se metiera en estos asuntos y brindara toda

su colaboración, como sucede hoy con la alianza entre el Tigre Abelardo y Donald Trump. Como para no dejar dudas de esta nueva sociedad contra el crimen, hace poco Trump definió al Tigre Abelardo como un gobernante “excelente”. La “sanción social”, por parte del presidente De la Espriella, quien sin cálculo político increpa a los señalados de graves delitos de corrupción, también es fundamental en esta cruzada contra la corrupción. Con semejante socio y con una voluntad política sin antecedentes, por primera vez la corrupción política en Colombia empieza a ser acorralada.

Congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD, en la mira del “Tío Donald”

El llamado “capítulo de los congresistas” tiene que ver con su actuación durante los trámites leyes en las que el gobierno de Petro tenía particular interés. Así sucede con Manrique, Manzur y Bitar, quienes se habrían beneficiado económicamente

a cambio de “ayudarlo” al gobierno en el trámite de sus leyes. Esta presunta actuación irregular -o abiertamente ilegal- también comprometería a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Los congresistas afrontan procesos ante la Corte

Suprema de Justicia por el presunto delito de “cohecho impropio”. A la investigación también han sido vinculados los excongresistas y congresistas Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Todos ellos aparecen mencionados en el escándalo

de la UNGRD. Los políticos habrían sido beneficiados con multimillonarios contratos en zonas donde ejercen influencia electoral, como Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba; El Carmen de Bolívar; a cambio de ayudar al gobierno en el trámite de sus proyectos.